

# Algunas cuestiones sobre la rebelión actual boliviana

**Alejandro M. Schneider**  
**Historiador UBA-UNLP**

A casi seis meses de haber asumido, el presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta una importante rebelión con epicentro en el departamento de La Paz y menor medida en Oruro y otras regiones. La actual oleada de protestas se inscribe en un proceso que se inició desde fines del año 2025 cuando los trabajadores salieron a manifestar en las calles en contra del gasolinazo, rechazando la agenda neoliberal del mandatario.

A pocos días de iniciada su gestión, Paz adoptó una serie de disposiciones económicas para beneficiar a los sectores más poderosos. Entre otras medidas se anularon cuatro impuestos: a las grandes fortunas, a las transferencias financieras, al juego y a las promociones empresariales. En sintonía con ello, el 17 de diciembre, el gobierno promulgó el Decreto Supremo (DS) 5503 que establecía un fuerte incremento a los combustibles. Junto con ello se liberaban las exportaciones mientras se beneficia al gran empresariado con exenciones, con una generosa flexibilización normativa y con ventajas comerciales. Además, se abría la puerta a las privatizaciones. En lo inmediato, el decreto 5503 produjo una fuerte subida de precios. En la práctica, la gasolina especial subió un 86% y el diésel un 164%.

Frente a ello, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró cuarenta y ocho horas más tarde un paro general indefinido, con movilizaciones de manera escalonada, en demanda de su derogación. La medida de fuerza estuvo acompañada con huelgas de hambre y bloqueos de caminos. Ante el incremento de la protesta, el 11 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo derogó parcialmente el (DS) 5503.

A pesar de ese breve retroceso, el gobierno continuó con su agenda. Así, en marzo de este año promulgó el (DS) 5598 modificando el marco regulatorio del sistema eléctrico eliminando la exclusividad de la Empresa Nacional de Electricidad. Por medio de esa medida, se permitió que empresas privadas, públicas y mixtas participen en la generación, importación y exportación de electricidad y gas.

No solo eso. Semanas más tarde se sancionó la ley Marinkovic (ley 1720) que facilitaba la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad, lo que las convertía en embargables, permitiendo que los grandes terratenientes y latifundistas se terminasen quedando con las pequeñas propiedades campesinas.

A ello se sumaron los escándalos de corrupción de funcionarios de su gobierno como la denuncia sobre el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo sobre la seguridad aeroportuaria o el pago que se hizo con sobreprecio en la importación de combustibles por parte del director de YPFB.

El descontento de la población sobre esos hechos quedó expresado en las elecciones locales en el mes de marzo. En esa ocasión, el oficialismo obtuvo dos de las nueve gobernaciones y menos de cuarenta de las más de trescientas alcaldías del país. A eso se sumó, la escandalosa decisión del Tribunal Supremo Electoral de declarar al candidato Luis Revilla como gobernador de La Paz con cerca del 13% de los votos válidos. Además, es válido observar la crisis existente en el gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, donde el vicepresidente Edmand Lara se encuentra duramente enfrentado con Paz. En última instancia, existe una grave crisis de legitimidad que no solo atraviesa al gobierno sino también al conjunto del sistema partidario. Crisis que, como observamos hace años, atraviesa también a Evo Morales y al MAS. El ordenamiento político e institucional que estos últimos habían establecido durante trece años hoy no ha sido reemplazado por ninguna fuerza política ni por ningún líder. Con ese escenario de fondo, en abril se inició el actual ciclo de rebelión en el país, sobre todo, en los departamentos occidentales. En ese mes, el personal del sector salud, enrolado en la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública, llevó adelante una serie de medidas de fuerza en rechazo a despidos injustificados y a la escasez de insumos, medicamentos y equipamiento en los centros hospitalarios de todo el territorio nacional. A eso se añadió, la marcha de campesinos y originarios que se inició el día 8 desde Cobija (Pando) en dirección a La Paz exigiendo al gobierno que se abrogue la ley 1720 que intentaba pasar las tierras comunitarias a manos de terratenientes y empresarios. En el trayecto, se sumaron sectores del Beni y de otras regiones, contando con el respaldo de la COB y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Pocas semanas más tarde, el Primero de Mayo, la central obrera efectuó un cabildo abierto en la ciudad de El Alto en donde se declaró un paro indefinido hasta que el gobierno acepte sus demandas entre las que figura un aumento de salarios del veinte por ciento y la abrogación definitiva de la ley 1720, entre otras exigencias. En ese contexto, distintos sectores de la población como los mineros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), los cooperativistas de la Federación de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, los Ponchos Rojos de la región de Omasuyos, los maestros urbanos y rurales, los transportistas de La Paz, los interculturales de Comunidades de Alto Beni, entre otros, salieron a las calles y a las rutas, cortando el tránsito de ellas, en distintos puntos del territorio nacional.

De ese modo, existe un amplio rechazo social por la devaluación de la moneda, por el aumento del precio de los alimentos, por la crisis de la gasolina (ya sea por su incremento como la adulteración del combustible), por las medidas económicas adoptadas a favor de los sectores más concentrados, por la corrupción política de su gabinete, etc. Todo este panorama, hace que las movilizaciones sean encabezadas al grito del pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El mandatario del Palacio Quemado se sostiene en base a una dura represión militar y policial que dejó como saldo a cinco personas asesinadas y cientos de heridos. Junto con ello cuenta con el apoyo de la derecha internacional de Estados Unidos, Israel, Argentina, Chile y el respaldo de la OEA. A eso se suma, el apoyo de los sectores empresariales (ganaderos, industriales, turismo) que se encuentran perjudicados por los cortes de rutas y las medidas de fuerza. Junto con ellos, distintos grupos (como los agroexportadores de Santa Cruz) salieron a organizar a manifestantes “cívicos” para enfrentar a las movilizaciones obreras y campesinas.

Aunque los grandes medios, los empresarios y el gobierno acusan a Morales y al MAS como los instigadores de estas protestas, el antiguo presidente no participa directamente de las mismas; su fuerza política y su liderazgo continúa siendo débil, tan solo cuenta con cierta presencia en el Chapare. Las movilizaciones se desarrollan por fuera de su voluntad y de su dirección, siendo centralmente el epicentro las provincias que componen el departamento de La Paz. A pesar de la radicalidad de las acciones callejeras, todo esto también indica que estas protestas poseen un límite. La exigencia de que renuncie el presidente no se acompaña de una propuesta unificada, como en octubre de 2003, para el día después. Por eso, en esta coyuntura, es necesaria la mayor participación de trabajadores, campesinos y originarios, fortaleciendo a través de asambleas de base la lucha en las calles, en los barrios y en los lugares de trabajo. Asimismo, es necesario que se extienda a otras regiones y departamentos de Bolivia. Si bien la protesta conmueve el escenario político; se carece de un liderazgo unificado y de un premeditado horizonte político. La COB aún no es lo que era antes de 1985; a pesar de ello, sigue irradiando con su accionar a otros actores sociales. Lo que queda claro, en estas jornadas, es la confirmación de la existencia de un Estado aparente junto con una poderosa sociedad civil tal como nos enseñaba René Zavaleta Mercado.

22 de mayo de 2026